



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Octavio de Jesús Gallego Cano
DEMANDADOS	Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.AS. Colpensiones Carlos Arturo Quintero Hurtado
RADICADO	05-001-31-05-016-2018-00508
TEMA	Relación laboral, aportes a la seguridad social
DECISIÓN	Confirma sentencia

El veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA y GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 176** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **OCTAVIO DE JESÚS GALLEGO CANO** contra **TRANSPORTES JERICÓ, PUERTO RICO, TARSO S.AS.**, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-** y **CARLOS ARTURO QUINTERO HURTADO**, con radicado 05-001-31-05-016-2018-00508.

• **PRETENSIONES:**

Aspira el demandante se declare que con Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.AS existió un contrato de naturaleza verbal e indefinido entre el 1° de enero de 1996 al 12 de diciembre de 2015. Que se condene a esta y al señor Carlos Arturo Quintero Hurtado al pago de los aportes a la seguridad social en salud y pensión por los siguientes períodos: 1° de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2003, del 1 de marzo al 30 de abril de 2004; del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2005; del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2007; del 1° de agosto de 2008 al 28 de febrero de 2013 para que sean cargados en su historia laboral por Colpensiones.

• **HECHOS**

Las anteriores pretensiones se sustentan en los hechos siguientes, los cuales se transcriben de forma textual, incluidos posibles errores:

“PRIMERO: El señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, laboró para la empresa TRANSPORTES JERICO PUEBLO RICO TARSO S.A.S desde el año 1996 hasta el día 12 de Diciembre de 2015, sin ninguna interrupción, cumpliendo la labor encomendada de manera personal, atendiendo las instrucciones de la empleadora sin que se presentara llamado de atención o queja alguna en el cumplimiento de su labor, y cumpliendo estrictamente el horario laboral establecido.

SEGUNDO: El señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, se desempeñó en el cargo de conductor del vehículo tipo Escalera de placa TAF 917, afiliada a la empresa TRANSPORTES JERICO PUEBLO RICO TARSO S.A.S y de propiedad de CARLOS ARTURO QUINTERO HURTADO.

TERCERO: El señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, recibía un salario correspondiente al salario mínimo legal mensual vigente, más las prestaciones de ley.

CUARTO: El señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, presento carta de renuncia a la empresa TRANSPORTES JERICO PUEBLO RICO TARSO S.A.S, el día 12 de Diciembre de 2015, por medio de la cual manifestó que no continuaría prestando sus servicios a la empresa y solicitó igualmente se expidiera carta de recomendación donde se especificara el tiempo laborado y la función cumplida la cual nunca fue entregada.

QUINTO: El señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, nació el día 30 de Marzo de 1960, es decir, a la fecha cuenta con 57 años de edad, y 299 semanas cotizadas al Fondo de Pensiones Colpensiones.

SEXTO: El señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, se entera de esta maniobra por parte de su empleador, cuando solicita a su fondo pensional Colpensiones una actualización de las semanas cotizadas para saber cuánto le falta.

SEPTIMO: Una vez revisada la historia laboral del señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, se pudo constatar que faltan varios periodos de cotización con la empresa acá demandada como son:

- Del 1 de Enero de 1996 al 31 de Diciembre de 2003.*
- Del 1 de Marzo de 2004 al 30 de Abril de 2004.*
- Del 1 de Agosto de 2005 al 31 de Diciembre de 2005.*
- Del 1 de Septiembre de 2007 al 31 de Diciembre de 2007.*
- Del 1 de Agosto de 2008 al 31 de Diciembre de 2008.*
- Del 1 Enero 2009 al 31 de Diciembre de 2009.*
- Del 1 Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2010.*
- Del 1 Enero 2011 al 31 de Diciembre de 2011.*
- Del 1 Enero 2012 al 31 de Diciembre de 2012.*
- Del 1 Enero 2013 al 28 de Febrero de 2013.*

OCTAVO : Por lo que se procedió el día 28 de Marzo de 2016 a solicitarle a la empresa TRANSPORTES JERICO PUEBLO RICO TARSO S.A.S, certificara el tiempo laborado por el señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, desde el año 1996 al 12 de Diciembre de 2015, sin respuesta alguna.

NOVENO: El día 30 de Agosto de 2016, por medio de derecho de petición el señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, solicitó nuevamente a la empresa TRANSPORTES JERICO PUEBLO RICO TARSO S.A.S, se expidiera constancia o certificación laboral donde se especifique el tiempo laborado, tipo de contrato, salario devengado, y el cargo que desempeñaba. Además, solicitó le informaran la administradora de fondo de pensión, la empresa prestadora de salud y la administradora de riesgos laborales a las cuales se encontraba afiliado y se le realizaron los aportes durante los años que laboro para la empresa.

DECIMO-. Que el día 18 de Agosto de 2017, el señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO, presento acción de tutela contra la empresa TRANSPORTES

JERICO PUEBLO RICO TARSO S.A.S, por cuanto, esta había vulnerado el derecho fundamental al derecho de petición.

DECIMO PRIMERO : Que el día 25 de Agosto de 2017, el señor HERNAN DARIO BUILES CORTES, representante legal de TRANSPORTES JERICO PUEBLO RICO TARSO S.A.S, respondió el derecho de petición enunciado en el hecho Octavo de este libelo manifestando que no se encuentra documento alguno que acredite la relación laboral, que la contratación del conductor era de cargo del dueño de la escalera y que por encargo de los propietarios se canceló seguridad social para el grupo de ESCALERAS para pensión – COLPENSIONES, para SALUD – COOMEVA E.P.S ; Y ARL – POSITIVA

DECIMO SEGUNDO: Ahora bien, las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y constatar que los conductores de sus equipos cuenten con la licencia de conducción vigente y apropiada para el servicio, así como su afiliación al sistema general de seguridad social según lo prevean las disposiciones vigentes sobre la materia.

DECIMO TERCERO: La empresa TRANSPORTES JERICO PUEBLO RICO TARSO S.A.S, debe por ley contratar laboralmente a sus conductores y en virtud de ello, asumir el pago no solamente de los salarios y prestaciones que la relación laboral origine, sino que también debe asumir el pago del porcentaje que le corresponde frente a los aportes obligatorios a la seguridad social integral de sus trabajadores y los aportes parafiscales.

DECIMO CUARTO: La empresa de transporte TRANSPORTES JERICO PUEBLO RICO TARSO S.A.S fue el empleador del señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO desde el 1 de Enero de 1996 al 12 de Diciembre de 2015 , quien se desempeñaba como conductor de un vehículo afiliado a la misma, por ende está obligada al reconocimiento de todos los derechos y prerrogativas propias del contrato de trabajo, como el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones que se causen al momento de la terminación del contrato de trabajo, y afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, en calidad de trabajadores dependientes.

DECIMO QUINTO: En el caso de la mora del empleador o no pago de los aportes, ya ha dicho tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que cuando el empleador se encuentra en mora de pagar las cotizaciones o no realiza el pago, esa mora o falta de pago no tiene por qué soportarla el afiliado quien ni siquiera es consciente de si su empleador o no paga las cotizaciones, pero que si le hace los descuentos obligados en la proporción que al trabajador le compete, es más, se reitera en el hecho de que esa es una obligación de la aseguradora, en el sentido de que si advierte periodos impagados o morosos, la misma ley lo dota de los mecanismos expeditos para hacerse al cobro coactivo de las mismas a través de la jurisdicción coactiva.

DECIMO SEXTO: A la fecha la empresa no ha tenido pronunciamiento alguno, sobre el pago de los periodos faltantes así mismo es importante resaltar que si no existen dichos pagos el empleador debe solicitar el pago del cálculo actuarial ante COLPENSIONES, ya que según mi poderdante nunca tuvo interrupciones en el periodo laborado para la empresa, razón por la cual es importante tener presente la figura del cálculo actuarial."

- **CONTESTACIONES:**

Colpensiones: Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones elevadas en su contra. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: buena fe, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S.: Se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones al señalar que con el demandante no tuvo un vínculo laboral. Como excepciones de fondo propuso: imposibilidad de la

obligación de hacer aportes por quien no es empleado de Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S., imposibilidad de reconocer prestaciones asistenciales y económicas sin el lleno de los requisitos, imposibilidad de condena en costas, compensación y prescripción.

Carlos Arturo Quintero Hurtado: Aceptó que el vehículo tipo Escalera de placa TAF917 que conducía el demandante es de su propiedad, el cual se encontraba afiliado a la empresa demandada. Asimismo, que el actor laboró para la empresa desde 1996 al 12 de diciembre de 2015 sin interrupción alguna en calidad de conductor. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones al advertir que la obligación del pago de los aportes a la seguridad social recae en la empresa de transportes demandada. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: prescripción, inexistencia de la obligación, ilegitimidad en la causa por pasiva, ausencia de culpa, buena fe por parte del demandado.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 18 de agosto de 2020, el Juzgado Decimosexto Laboral del Circuito de Medellín declaró que existió una relación laboral entre el señor OCTAVIO ALBERTO GALLEGO CANO y la sociedad de TRANSPORTES Jericó, PUEBLO RICO, TARSO S.A.S. y solidariamente al señor CARLOS ARTURO QUINTERO HURTADO, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1996 y al 2 de diciembre de 2015. Condenó a estos dos demandados a cancelar los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones a favor del demandante por el interregno mencionado con un salario mínimo como cotización. Se le ordenó a Colpensiones a realizar el cálculo dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, del valor de las cotizaciones que no se encuentran reflejadas en la historia laboral del demandante en los períodos señalados. Condenó a los demandados a realizar el pago de manera solidaria, del valor que determine Colpensiones dentro de los 30 días de ejecutoria de la providencia. Impuso el pago de las costas procesales a cargo de TRANSPORTES JERICÓ, PUEBLO RICO, TARSO S.A.S. y CARLOS ARTURO QUINTERO HURTADO.

- **APELACIÓN:**

La decisión de instancia fue recurrida en apelación por Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S., quien a través de su mandatario judicial la sustentó en los siguientes términos: que el juez tomó la decisión de condenar de manera solidaria al pago de los aportes a la seguridad social inducido al error, pues tal y como lo ha advertido desde que se contestó la demanda y a lo largo del proceso, no era obligación de la empresa el pago de las cotizaciones pues no era el guardián material del vehículo. Advierte que podría incurrirse en un falso juicio de identidad al no tenerse de presente los testimonios, quienes indicaron que el tema de **las cotizaciones se hace directamente por el propietario del vehículo y ellos daban a conocer de tal actuación a la empresa**. Señaló que otro aspecto a resaltar es el relacionado con que en la sentencia se hace referencia al pago de las cotizaciones en salud, frente a lo cual considera que es inverosímil esta aseveración pues no aparece en el plenario ninguna prueba de que el demandante tuviera que sufragar erogaciones por falta de atención en salud porque la EPS le hubiera suspendido el servicio. Si se acepta esta situación se estaría en una abierta contradicción en lo que tiene que ver con un hecho irrefutable. Esto es, que si no hay prueba se estaría en un falso juicio, y la prueba se estaría llevando allí sin que tuviere que llevarse. Añadió que la sentencia es equivocada en lo relacionado a la obligación que se le impuso a Colpensiones, toda vez que este estaba en la obligación de hacer ver sobre la falta de cotizaciones que en su momento se estaba dando por parte de la empresa o del propietario. Aludió al mérito que se le dio a las pruebas decretadas en el proceso. Que se hizo una mala valoración a la hora de decretar la solidaridad de que trata la ley 336 de 1996, pues no se puede desconocer lo establecido en el contrato de vinculación, esto es, que las cotizaciones debían ser hechas por el propietario del vehículo.

Si bien el señor Carlos Arturo Quintero Hurtado presentó recurso de apelación, este fue declarado desierto por falta de sustentación.

- **ALEGATOS:**

Colpensiones: *“Por lo cual deseo resaltar y reiterar que el demandante solicita se declare la existencia de un contrato de trabajo verbal con el empleador Transportes Jericó, Pueblo Rico Tarso S.A.S., comprendido entre el 01 de enero de 1996 al 12 de diciembre de 2015 y posterior a lo anterior y como consecuencia de la declaración se ordene el pago de los aportes a pensión y salud. Respecto al pronunciamiento frente a la solicitud de declaratoria de la existencia de la relación laboral entre el demandante y la empresa Transportes Jericó, Pueblo Rico Tarso S.A.S., no es procedente por*

cuanto lo anterior corresponde a una reclamación de carácter laboral, en consecuencia, nos encontramos frente a una falta de legitimación en la causa por pasiva evidente por parte de esta administradora, ya que la pretensión principal se opone al objeto misional para lo cual fue creada Colpensiones, es decir, la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida, tal como lo dispone el Artículo 155 de la Ley 1151 de 2007"

CONSIDERACIONES:

Atendiendo a la apelación formulada por la codemandada Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S., el problema jurídico para resolver por esta Sala abarcará los siguientes temas: **i)** relación laboral entre conductor, propietario del vehículo y empresa a la que está afiliado; **ii)** responsabilidad solidaria de estos dos últimos; **iii)** aportes a la seguridad social; **iv)** responsabilidad de Colpensiones; **v)** costas procesales.

i) Relación laboral

Indica el demandante que laboró al servicio de Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S.; esta última señala que no lo unió con el señor Gallego Cano un contrato de trabajo, pues este únicamente era el conductor de un vehículo de propiedad de Carlos Arturo Quintero Hurtado, con quien se suscribió un contrato de vinculación; por su parte, el señor Quintero Hurtado aceptó que el vehículo que conducía el demandante es de su propiedad, el cual se encontraba afiliado a la empresa demandada y que el actor laboró para la empresa desde 1996 al 12 de diciembre de 2015 sin interrupción alguna en calidad de conductor.

La prueba testimonial da cuenta que efectivamente el demandante conducía el vehículo tipo Escalera de placa TAF917, mismo que se encontraba afiliado a Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S.

La inconformidad planteada por la codemandada recurrente va dirigida a que con el demandante no lo unió un contrato de trabajo.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido pacífica al señalar que los conductores de los vehículos de transporte público deben ser contratados directamente por las empresas afiliadoras. Así se pronunció en sentencia SL3718-2020:

“Esta Sala ha reiterado pacíficamente que, en virtud de las normas imperativas consistentes en las leyes 15 de 1959 y 336 de 1996, así como en la sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 1999, los conductores de los vehículos de transporte público deben ser contratados directamente por las empresas afiliadoras y, entre otras cosas, deben estar protegidos por los regímenes laborales y del sistema de seguridad social. (CSJ SL29809, 2 oct. 2007, CSJ SL31647, 22 jul. 2008, CSJ SL8675-2017 y CSJ SL14280-2017). Precisamente, en esta última providencia la Corte explicó:

Para zanjar cualquier tipo de controversia, en su artículo 36, el citado Estatuto, dispuso que “Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo” es decir que actualizó la obligación ya prevista en la reseñada Ley 15 de 1959, exhibiendo así el interés permanente por regular tal prestación de servicios, y por procurar un ejercicio regulado de la actividad. Luego el Decreto 1553 de 1998, recabaría en que la libertad de empresa, el incentivo de la iniciativa privada, tenía en todo caso el marco del respeto de los derechos del trabajo y de la seguridad social, siendo por tanto evidente que los conductores de este tipo de servicio público tienen que encontrarse protegidos por ambos.

Visto lo anterior, la cooperativa demandada no tenía excusa para dejar de pagar las prestaciones sociales debidas al trabajador, valiéndose de dudas en torno a la naturaleza de la relación laboral, que, se reitera, estaba plenamente clarificada por ministerio de la ley.”

Atendiendo a que no es objeto de discusión la prestación personal del servicio del demandante ni los extremos de la relación laboral, en virtud de lo consagrado en el artículo 36 de la ley 336 de 1996, el verdadero empleador es Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S., empresa que, desde un principio de la relación laboral debió contratarlo directamente. Esto conlleva a que entre las partes medió un contrato verbal e indefinido.

ii) Responsabilidad solidaria

El recurrente manifestó que de la prueba testimonial se evidenció que en el tema de las cotizaciones, estas se hacían directamente por el propietario del vehículo y de ello se daba a conocer a la empresa. Además, que de la lectura del contrato de vinculación del vehículo a la empresa, se desprende que las cotizaciones debían ser hechas por el propietario del vehículo.

En la citada sentencia SL3718-2020, la Corte Suprema de Justicia reiteró que es una obligación conjunta de las empresas de transporte y de los propietarios del vehículo proteger laboralmente a los conductores. Así se pronunció tal corporación:

“El artículo 15 de la Ley 15 de 1959 prescribe que el contrato de trabajo verbal o escrito de los choferes asalariados del servicio público, «se

entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para efecto de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables».

A su turno, el precepto 36 de la Ley 336 de 1996 dispone que «los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo».

Al igual que lo ha sostenido frente a la solidaridad del art. 34 del CST atrás vista, la Corte tiene establecido que las disposiciones transcritas pretenden asegurar condiciones dignas de trabajo a los conductores de vehículos de servicio público de transporte. En particular, sobre la imposición de responsabilidad solidaria a los propietarios de los equipos, se ha dicho que el mandato legal se encamina a «garantizar los derechos laborales de ese grupo de trabajadores, con el fin de que sus garantías no sean menoscabadas por maniobras fraudulentas de los propietarios de los vehículos de servicio público» (CSJ SL4302-2018).

Sin duda alguna, estas expresiones legislativas son una clara intervención a la libertad constitucional de empresa de que gozan tanto las operadoras de transporte como los propietarios de los equipos (artículo 333 de la Constitución Nacional), sujetos que están llamados a ejercerla al tamiz de los mandatos protectores del trabajo. En efecto, así se extrae del Decreto 1553 de 1998, que, al reglamentar la prestación de este servicio público, al amparo de principios como la competencia económica y el incentivo de la iniciativa privada, fijó un marco de respeto de los derechos del trabajo y de la seguridad social de los conductores (CSJ SL14280-2017). De esta manera, aquellas prerrogativas superiores quedaron armonizadas con los demás bienes y valores constitucionales que conforman el orden jurídico.

De modo que el derecho del trabajo considera la relación existente con los dueños de los automotores, quienes igualmente deben procurar, requerir y exigir a las compañías operadoras de transporte la satisfacción de las garantías laborales, so pena que, por su indiferencia, dejadez o permisividad, se vean abocados a asumir responsabilidades legales, como quedar afectado por la calidad de deudor solidario.

Se trata entonces, como se concluyó en la sentencia CSJ SL4302-2018, de una obligación conjunta de las empresas de transporte (quien es el empleador) y de los propietarios en torno a proteger laboralmente a los conductores de los vehículos.”

De lo anterior se desprende que, por mandato legal, a la luz de lo consagrado en el artículo 36 de la ley 336 de 1996, tanto empresa de transporte como propietario del vehículo deben responder solidariamente por las obligaciones laborales a cargo del conductor, pues de una parte, la vinculación laboral se da con Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S. y de otro lado, el señor Carlos Arturo Quintero Hurtado debía procurar, requerir y exigir de aquella la satisfacción de las garantías laborales del señor Gallego Cano. La negligencia de los demandados conlleva a que asuman el pago de las obligaciones de manera solidaria.

iii) Aportes a la seguridad social

El artículo 15 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la ley 797 de 2003 establece que serán afiliados al sistema general de pensiones en forma obligatoria todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo. A su turno, el artículo 17 de la ley 100 de 1993, modificada por el artículo 4° de la ley 797 de 2003 señala acerca de la obligatoriedad de las cotizaciones al sistema general de pensiones, lo siguiente: *“Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen”*

De otro lado, el artículo 157 de la ley 100 de 1993 indica que deberán afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo las personas vinculadas a través de contrato de trabajo. El numeral 1° del artículo 161 de la misma norma establece que son deberes de los empleadores inscribir en alguna Entidad Promotora de Salud a todas las personas que tengan alguna vinculación laboral, sea ésta, verbal o escrita, temporal o permanente. El párrafo de dicho artículo advierte que *“Los empleadores que no observen lo dispuesto en el presente artículo estarán sujetos a las mismas sanciones previstas en los artículos 22 y 23 del Libro Primero de esta Ley. Además, los perjuicios por la negligencia en la información laboral, incluyendo la subdeclaración de ingresos, corren a cargo del patrono”*

Nótese entonces que para ambos riesgos, salud y pensión, es obligación del empleador afiliar a su trabajador y realizar el pago de los aportes correspondiente, so pena de la aplicación de la sanción moratoria de que trata el artículo 23 de la ley 100 de 1993.

Por lo expuesto, por ministerio de la ley estaba a cargo del empleador Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S. el pago de los aportes a la seguridad social en salud y pensión en favor del trabajador por los períodos mencionados. Tal obligación no puede ser desconocida por el hecho de que en algunos períodos tales pagos pudieron realizarse por el dueño del vehículo, toda vez que, se insiste, por mandato legal el pago recae en cabeza del empleador; en virtud de la solidaridad antes mencionada, está en cabeza de los codemandados la obligación.

La obligación del pago de los aportes a salud no está condicionada a que se hubiere prestado algo servicio asistencial o económico en cabeza del trabajador, pues se repite, tal obligación es de orden legal.

iv) Responsabilidad de Colpensiones

Si bien Colpensiones con fundamento en el artículo 24 de la ley 100 de 1993 contaba con la facultad de iniciar con las acciones de cobro de los aportes a pensión en mora, el hecho de no haberla ejercido con anterioridad no excluye al empleador de su pago, ya que no hay fundamento jurídico alguno que lo regule. Además, nada se dijo en el recurso de apelación acerca de la excepción de prescripción.

La única responsabilidad de la AFP en el caso particular radica en la liquidación de los aportes en mora, mientras que la obligación de la empresa de transportes y el dueño del vehículo es su pago.

v) Costas procesales

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir avante la apelación formulada por Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.A.S., son de su cargo y en favor del demandante. De conformidad con lo señalado en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.000.000.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por Colpensiones.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

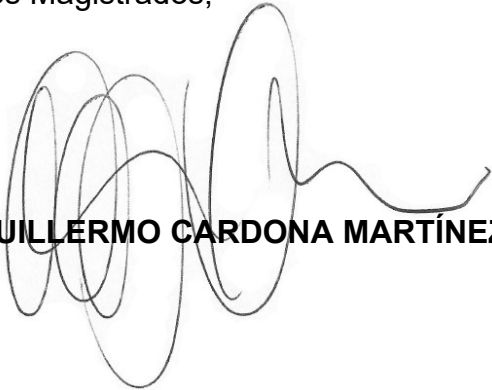
RESUELVE:

Se **CONFIRMA** la sentencia que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia mencionada.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Octavio de Jesús Gallego Cano
DEMANDADOS	Transportes Jericó, Puerto Rico, Tarso S.AS. Colpensiones Carlos Arturo Quintero Hurtado
RADICADO	05-001-31-05- 016-2018-00508
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 1° de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 1° de agosto de 2022 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO